

IV Congreso Chileno de Antropología. Colegio de Antropólogos de Chile A. G, Santiago de Chile, 2001.

De los Saberes a los Poderes: la dimensión política en la aplicación de planes de desarrollo.

Roberto Morales Urra.

Cita:

Roberto Morales Urra. (2001). *De los Saberes a los Poderes: la dimensión política en la aplicación de planes de desarrollo. IV Congreso Chileno de Antropología. Colegio de Antropólogos de Chile A. G, Santiago de Chile.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/iv.congreso.chileno.de.antropologia/119>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/ef8V/Mqg>

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

De los Saberes a los Poderes: la dimensión política en la aplicación de planes de desarrollo

Roberto Morales Urra

Análisis crítico de propuestas de desarrollo

Nos situaremos desde una perspectiva que considera las propuestas que emergen desde los diversos sectores que forman parte del estado nacional: gobierno, ongs, empresa privada, organismos sociales y políticos; como aquellas que se han formulado desde distintas formas de asociación de la sociedad indígena, particularmente, desde los Mapuche: asociaciones de técnicos y profesionales, estudiantes, organizaciones socio-étnicas. Nuestro abordaje se centra entonces, en las relaciones inter-étnicas, relacionando los aspectos culturales con los aspectos económicos, ambientales y políticos.

En las concepciones de desarrollo que prevalecen en las políticas oficiales del estado nacional y en las de la empresa privada, se verifica una curiosa inversión: las poblaciones humanas (el "medio socio-económico") afectadas por los proyectos, pasan a formar parte del ambiente. Es así que las sociedades indígenas pasan a ser consideradas como un problema; y son las empresas y el gobierno quienes establecen para quién es el ambiente, y cual el lugar de los sectores sociales afectados.

En otros términos, es la noción misma de sociedad la que es reducida a un estado ambiental, o sea, naturalizada, frente a un estado que, materializado en sus proyectos de desarrollo, asume el lugar de la sociedad. El conflicto pasa a ser entre un Estado y una Naturaleza, un sujeto que actúa y un ambiente que reacciona. La gente pasa a ser ambiente y la obra: agente. En este pase mágico, desaparecen las sociedades, los grupos sociales concretos, se deshace en el aire la dimensión de lo político, y quedan finalmente dos Naturalezas: la naturaleza bruta del Estado, que se impone sobre las poblaciones "impactadas" como si fuese un fenómeno natural y un estado bruto de Naturaleza, a la que son asimiladas las "comunidades indígenas".

Lo que constatamos es la distorsión y apropiación mercantil, de un discurso legítimo y políticamente fundamental -el de la lucha por el respeto al ambiente-, a través de su incorporación a la ideología de los sectores autoritarios y dominantes del estado. Lo que se da entonces con estas nociones de desarrollo, es el enmascaramiento de una forma de dominación política. Las manipulaciones evidentes en la ideología ambientalista del estado, que se manifiestan en sus discursos "cada vez más verdes" son particularmente graves, cuando se refieren a las sociedades indígenas amenazadas por las grandes obras del modelo de desarrollo neoliberal. Siguiendo en esto, el proceso que ha tenido el discurso de las Corporaciones Financieras que constituyen el llamado "Banco Mundial". (Goldman, 1997).

Las sociedades indígenas son especialmente vulnerables a aquella naturalización que señalamos, dado que aún ejercen dinámicas políticas propias, estando sometidos históricamente a un proceso de sujeción y confinamiento territorial, y manifestando formas complejas y singulares de articulación de su relación con su naturaleza (su "ambiente").

Desde otros sectores de la sociedad nacional, especialmente desde los organismos no gubernamentales, instituciones de asistencia y apoyo al "desarrollo indígena", como también desde los centros académicos que se asoman inicialmente a la temática, e incluso en varios sectores de instituciones y organizaciones indígenas, los "indígenas" acaban siendo pensados también como pueblos "naturales".

Esto es así cuando se los representa como viviendo en sociedades que muestran una continuidad perfecta con la naturaleza, "integradas" al ambiente como una especie más. Visto así, resulta fácil concluir que las sociedades indígenas serían intrínsecamente "ecológicas", debiendo ser protegidas y "preservadas" como testimonio de un pasado ideal ambiental. Entonces, los derechos indígenas pasan a depender de nuestros derechos, de nuestro derecho a la contemplación de un "Homo Naturalis". Se conciben los derechos in-

dígenas al margen de las dimensiones políticas, desconociéndose que tales derechos no dependen del "valor ecológico" de estos pueblos, sino de su condición de grupos humanos social y culturalmente diferenciados dentro de la sociedad nacional. Creemos que en definitiva se trata de la incapacidad de pensar a las sociedades indígenas en su cualidad de sujetos sociales.

Volviendo a las nociones dominantes, identificamos en ellas la naturalización "negativa" de la sociedad indígena, evidenciando un raciocinio evolucionista, que considera a los indígenas como representantes atrasados de la especie humana, pueblos aún no plenamente sociales.

Al tomar las sociedades indígenas como muestras imperfectas y estadísticamente insignificantes de un Hombre abstracto, tal ideología rechaza la condición integralmente social de estos pueblos. Imagina que estas sociedades deberán pasar por un proceso inevitable de cambio, un inexorable proceso de transición. Es la transición la que aparece como natural. Por eso, los pueblos indígenas pueden y deben ser monitoreados por el Estado: trasladados territorialmente, culturalmente manejados y transformados socialmente.

En ambas concepciones subyacen dos actitudes aparentemente opuestas, e incluso contradictorias en la práctica, pero que acaban por ser complementarias y funcionalmente relacionadas: la ingenuidad de una sirve a la ignorancia maliciosa de la otra. Doble y alternativamente despolitizadas, al ser des-socilizadas, por estas naturalizaciones complementarias, las sociedades indígenas son de cualquier manera vistas como variables pasivas, poblaciones-objeto de decisiones ambientales externas. Componente o problema ambiental, que debe ser protegido -ya que está "adaptado"- o que puede ser indefinidamente "adaptable", las sociedades indígenas son aprehendidas fuera del elemento que define sus relaciones con el estado: el elemento de la dominación.

La perspectiva de análisis que aquí se ha aplicado, se basa principalmente en las formulaciones que Eduardo Viveiros de Castro y Lúcia M.M. de Andrade, hacen en el examen profundo y detallado de la situación de los pueblos indígenas afectados por el proyecto de hidroeléctricas en el área de Xingú, en Brasil, desde hace casi 10 años. (ver Castro y Andrade, 1988)

Como lo hemos indicado antes, las relaciones establecidas entre el Estado nacional y las sociedades indígenas, se han mantenido como una dimensión social y política de difícil enmarcamiento en la lógica de la negociación, en la que se hace más difícil aplicar la estrategia de la armonía para dirimir los conflictos a favor de lo que resulta adecuado para las nociones y prácticas del desarrollo dominante.

En esta situación, los diversos grupos indígenas han desarrollado discursos y prácticas que, crecientemente, cuestionan los fundamentos que le han dado el carácter a tales relaciones. En Chile, la reciente Ley Indígena fué promulgada en diciembre de 1993, y hoy día su aplicación en los aspectos de defensa y protección de las tierras, genera contradicciones con la política económica neoliberal, dejando al descubierto las tensiones y limitaciones de la sociedad política para resolverlas. Debe ser la sociedad civil organizada, la que debe avanzar y tomar en sus manos la dirección de los procesos y encontrar solución a estos conflictos de mil caras, donde se mezclan dinámicamente lo económico, lo étnico, lo ecológico, lo social y lo político.

En las situaciones referidas a los megaproyectos de inversión pública y privada, como en los procesos de expansión de capital, identificamos en variadas opiniones y prácticas, estas concepciones en sus más diversos matices. Cabe resaltar la participación de antropólogos y otros científicos sociales, con posturas contrapuestas, en las diversas etapas de tales procesos. Sólo algunas aristas se han hecho públicas y la puesta en común de tal participación, los argumentos esgrimidos, la consistencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se enseña y lo que se practica, todo eso, queda aún pendiente para un análisis en profundidad. Las ciencias sociales y en particular, la antropología y los antropólogos, debemos hacer evidentes nuestras acciones, ya que siempre están involucrados de manera directa los intereses de distintos grupos. Nuestras responsabilidades sólo se inician cuando terminamos un informe de investigación.

Diversos grupos mapuche que postulan un proyecto político de autonomía y autodeterminación, lo hacen mediante propuestas abiertas y públicas, las que pueden ser conocidas a través de los planteamientos directos de sus dirigentes e intelectuales, y en los documentos que difunden.

Acerca de las políticas públicas

La CONADI

La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, es una entidad estatal dependiente del Ministerio de Planificación y Desarrollo. Desde que fue creada por la Ley Indígena en 1993, ha debido enfrentar la compleja dinámica de las relaciones entre la sociedad chilena y los pueblos indígenas existentes en el país. Ha sido sometida a los más diversos juicios por parte de los sectores públicos y privados, constituyendo el tema de fondo el determinar si ha sido una entidad que contribuye al desarrollo de los pueblos indígenas. Obviamente esto ha sido respondido dependiendo de la perspectiva de desarrollo de quienes formulan sus planteamientos.

En la perspectiva de validar la existencia del organismo público, se ha afirmado que la CONADI es "un lugar de poder para las etnias" (Foerster y Montecino, 2001: A2.)

Esto se contrapone con las evidencias referidas al ejercicio efectivo de toma de decisiones cuando estas no coinciden con las gubernamentales, como se dió en las situaciones de petición de renuncias de los directores nacionales de la CONADI Mauricio Wenchulaf y Domingo Namuncura, como así también en la misión de "ordenar la casa" planteada a Rodrigo González y su equipo de funcionarios. Hasta ahora ha sido determinante para la designación de las autoridades de la CONADI el cuoteo político que dispone la Concertación, y no tiene mucho que ver con las autoridades de los pueblos indígenas.

Podría esgrimirse como argumento el que en el Consejo de la Conadi hay representación indígena, pero está diseñado numéricamente para que en el caso que los 8 representantes indígenas estén de acuerdo, no puedan constituir mayoría. Además, todos los que han sido consejeros (ratificados por el Presidente de Chile) han dejado de ser dirigentes de sus pueblos. Podemos preguntarnos entonces: ¿donde ha estado la CONADI para el ejercicio del poder indígena en Ralco, el ByPass, la Carretera de la Costa, el Código de Aguas, las recuperaciones de tierras, los conflictos con las empresas forestales, los heridos en Tirúa, los detenidos en la marcha del 25 de julio, la reforma procesal?

Se ha señalado que la CONADI ha tenido efectos positivos para los Mapuche, como la "recuperación de antiguos espacios territoriales". Al parecer este ha sido un proceso de compras de tierras a precios que han resul-

tado lucrativos para los particulares, para después entregarlos a las comunidades que han sabido presionar y negociar.

¿Se trata efectivamente de antiguos espacios territoriales? Probablemente en muchos casos sea así pero, esto no está garantizado ya que existen otras situaciones, como las familias de la comunidad Ailio de Newentue, que ahora residen cerca de Gorbea; y las de Temulemu (cerca de Traiguén) han sido trasladadas en el exFundo California (a 65 kms al suroeste de Temuco). Lo que se ha producido en tales casos es un fenómeno de relocalización institucionalizada, derivado del hecho que prima el mercado de tierras.

Además se ha sostenido que con la promulgación de la Ley Indígena se ha producido un "fortalecimiento de vínculos comunitarios y culturales... a través de las Areas de Desarrollo Indígena" Las ADI ¿donde? ¿en el Budi? ¿en el Alto Bio Bio?

En Budi se han fragmentado aún más todos los poderes locales, al articularse en innumerables grupos que se organizan para "acceder a los beneficios". Allí es una zona saturada por la presencia de los mas variados grupos de intereses. Y con las platas del BID, ahora eso es un mercado. Aunque habría que decir que se trata de "inversión de capital social y cultural" como les gusta decir a los que se consideran "ganadores" en esta dinámica de la llamada "globalización" (transnacionalización del capital financiero, diría).

En Alto BioBio, se han ido a otra dimensión las figuras antiguas: Don Manuel Neukuman, la Sra. Panchita, y están aisladas las Hermanas Kintreman. "Punalka" no volverá a descender desde lcalma por las "aguas turbias" del BioBio, ya que dos represas (por ahora) se lo impiden.

No es la CONADI en sí el tema de fondo a discutir, sino la perspectiva con la cual se definen las políticas públicas, las que si son determinantes para establecer las condiciones de las relaciones entre los pueblos indígenas y el estado chileno.

El movimiento mapuche y las negociaciones con representantes del estado chileno

El diálogo es parte de las tácticas puestas en práctica para la búsqueda de resolver conflictos pero, es imprescindible remitirse a las condiciones de los dialogantes, el tipo de relación existente entre ellos, las posiciones de fuerza (moral, política, económica, militar) desde las cuales se pretende establecerlo. Me pa-

rece que las posiciones de los dispuestos al diálogo, desde el momento que existen las condiciones adecuadas, se ponen a prueba durante todo el proceso, por lo cual, están sometidas a una permanente presión para adecuarse a las circunstancias de la negociación. Insisto en que este no es sólo un conflicto de posiciones o posturas, que pueden expresarse en los discursos, sino de sujetos social y culturalmente constituidos que han derivado en un confrontación básicamente política.

Algunos distinguen -destacándola positivamente- una "tradicón dialógica" que la entienden como un "fortalecerse a través del otro y sus instituciones", la que se habría expresado en el período de la Colonia y en la "comunidad nacional contemporánea". Pero tales relaciones han sido presentadas sin considerar el contexto de la estructura de poder en el cual se insertan las partes negociadoras.

Afirmar que existe una tradición dialógica, sin articularla con las evidentes confrontaciones y exclusiones que también han sido parte constitutiva de las relaciones entre sectores mapuche y el "otro", deriva hacia un cuestionamiento teórico y uno político.

El teórico es simple de enunciar: la identidad es resultado de la articulación (dinámica y dialéctica diría) entre las semejanzas y las diferencias. Y es en ese proceso que se constituye la "mismicidad" y la "otredad". Tal identidad es entonces indisolublemente construida desde la condición de sujeto (individuos en colectivos). En lo político no resulta difícil entender las relaciones que los jefes mapuches sostuvieron con sujetos que representaban para ellos, ser jefes o autoridades de los "otros": quechuas, aymaraes, militares castellanos, Olerie Antoine, sacerdotes y monjas, militares independentistas, agrimensores, jefes militares de fuertes, colonos, comerciantes, carabineros, jueces y abogados, latifundistas, dirigentes de los más diversos partidos políticos, pastores de las confesiones religiosas protestantes, profesores, antropólogos, asistentes sociales, funcionarios municipales, burócratas, gitanos, en fin, "ka mapu che", "ka molfün che".

Estas relaciones han sido muy políticas: desde la negociación y el acuerdo a la confrontación directa. Obviamente, en este árbol de referencia, mientras más nos alejamos de las raíces y del tronco, podemos identificar la disminución del poder que los mapuche han podido ejercer en la práctica de tales relaciones.

Análisis de una perspectiva política hegemónica en la sociedad chilena

Lo planteado a fines de septiembre del 2001 por el cientista político de U. Finis Terrae Carlos Martínez, respecto de que existirían vinculaciones via internet entre sectores del pueblo mapuche en Chile con el "terrorismo internacional", particularmente con la Bin Laden Corporation (¿?); obliga a pensar seriamente en la visión que tales sectores están construyendo respecto de los Mapuche y en especial respecto de las demandas políticas de autonomía y autodeterminación afirmadas en los discursos y en las acciones de algunos sectores mapuche. Sus opiniones que aparecen en un periódico (La Segunda) perteneciente a la cadena del empresario Agustín Edwards, pueden resumirse en el propósito de posicionar la certeza de vinculaciones entre los mapuche y el terrorismo. (La Segunda: 27-septiembre-2001 y 3-octubre-2001)

Unas semanas antes, don Gustavo Cuevas, cientista político, Decano de la Facultad de Derecho de la U. Mayor, afirma las vinculaciones de sectores mapuche con grupos externos, quienes los apoyarían tanto económica como ideológicamente; lo que respondería a una estrategia planificada, la que debería ser atacada con autoridad y también con "conversaciones que tengan como condición la no violencia". Las opiniones de Cuevas ponen el énfasis en lo que dan en llamar el "Estado de Derecho", sustentadas en el principio de un Estado, un País y una Nación. (El Diario Austral, A:33. Temuco, Domingo 5 de agosto de 2001).

Hipotetizamos que lo que conecta a Martínez y Cuevas, Finis Terrae y Mayor, La Segunda y El Austral, Edwards y la Corma, es compartir una perspectiva ideológico-política. Hasta ahora, las formulaciones de Martínez y Cuevas, no han sido acompañadas por suficientes antecedentes y referencias, lo que si es comprobable en el Informe Político No. 71, de julio del 2001, del Instituto Libertad y Desarrollo. Este informe es presentado por Andrés Benavente, cientista político de la U. De Chile y de la U. Diego Portales, en la cual trabaja también su coautor, el abogado Jorge Jaraquemada. Estos investigadores de lo virtual articulan el discurso de su informe político, en torno a la idea de que existiría un trasfondo político en el movimiento mapuche, pretendiendo la ingobernabilidad, calificándolo de "radicalismo étnico" que persigue "crear escenarios de confrontación y violencia". Así es cómo relacionan las demandas mapuche por territorio y auto-

mía a "los grupos extremistas tradicionales chilenos", al "indigenismo rebelde latinoamericano" y a "la izquierda radical". Para los autores, "se está incubando un proceso insurreccional no tradicional", para transformarse en un movimiento social armado "al estilo del zapatismo mexicano", "horadando", "provocando" y "cuestionando". Sostienen por último, la vinculación ideológica con "el proceso insurreccional vasco".

Tal "Informe Político" ha sido referido en los últimos meses en toda la cadena emol.com, propiedad del empresario A. Edwards, o sea en *El Mercurio*, *La Segunda* y *El Diario Austral* (de Temuco a Puerto Montt). El carácter de "Informe", supone un trabajo previo que fundamente su análisis y las conclusiones que presentan. Constatamos que no hacen referencia alguna al contacto directo con las personas y sus contextos, principio fundamental para el trabajo en las ciencias sociales.

Peró a propia institución Libertad y Desarrollo, un par de años antes ya había presentado su perspectiva de los mapuche, resumiéndola en la siguiente pregunta: "¿quién se arriesgaría a invertir en una economía donde las bases mismas del derecho de propiedad se encuentran debilitadas y donde la autoridad no entrega señales de gobernabilidad para hacer respetar tales derechos?" (*Temas Públicos* No. 422, 1999: 2-3).

Piensen que la gran mayoría de los Mapuche viven y trabajan tranquilamente y están integrados al país; aunque están en una situación socioeconómica deficitaria y de analfabetismo. La ley indígena ha impedido el desarrollo de los pueblos indígenas ya que no pueden comercializar sus terrenos. La frustración de los indígenas permite la efectividad de organizaciones ideológicas ambientalistas de izquierda, para inducir conflictos y reclamar las tierras y combatir por todos los medios al sector privado y a los no-indígenas. Aseguran que existe una industria indigenista, que recibe beneficios financieros de Europa y organizaciones internacionales. Califican la situación como "grave, porque afecta la gobernabilidad a corto plazo, hipoteca el futuro y alienta una espiral de conflictos. Se debilita la convivencia social y la economía chilena, al no otorgar garantías para la inversión nacional y extranjera" (Idem: 2).

La visión integracionista respecto de los mapuche, propia de los que han elaborado el discurso oficial del Estado chileno, probablemente ha sido influida por los trabajos de Sergio Villalobos. Este resume su pensamiento político frente a la emblemática situación en el Alto Biobío, afirmando que ha sido "creada artificialmente por antropólogos, indigenistas, políticos y gente

politicada" quienes "han tomado la defensa de las ocho familias, menospreciando el pensamiento y los intereses de la gran mayoría". Según Villalobos a "quienes se dicen defensores de los pehuenches ... no les importa que sigan en la miseria, en sus pobres tierras, sus casas traspasadas por la lluvia y el viento y manteniendo unos escuálidos animales". Para él, esto significa que "se menosprecia, además, la notable labor efectuada por Endesa para mejorar las condiciones de vida de los pehuenches".

Para Villalobos, "los pehuenches, igual que otros grupos indígenas, son manejados con métodos explícitos y otros encubiertos". En definitiva, "la preocupación indigenista y ecologista, se ha convertido en una barrera para el desarrollo y la modernización del país". Y declara que "es inaceptable que doce millones de chilenos deban ser perjudicados por sus artimañas". (*El Mercurio*, 1998:A2).

Casi tres años después, reitera su análisis diciendo que los problemas entre los "pehuenches" y los impulsores de la construcción de hidroeléctricas, no existirían y todo no sería más que un engaño público, una imagen creada artificialmente por los más diversos sectores. No vé los aspectos negativos derivados del hecho fundamental de que los mapuche que han habitado milenariamente el sector cordillerano, hayan sido sometidos a todo tipo de presiones para abandonar el *pewen mapu*. El historiador premiado oficialmente despliega una serie de antecedentes que confirman el proceso de chilenuización de los *pewenche*, en una creciente dependencia del dinero y de la forma de vida que hace dependientes del consumismo al 80% de los habitantes del país, controlado económicamente por unos cuantos grupos empresariales. Lo anterior es para Villalobos "desarrollo", y "avance social y material". (*El Mercurio*: 14 enero 2001).

También ha hecho una apología de la construcción de la Hidroeléctrica Ralco, Máximo Honorato Alvarez, como el presidente del Colegio de Ingenieros de Chile, con argumentos que evidencian su visión de los mapuche "los pehuenche están en un estado permanente de extrema pobreza, deficientemente alimentados, habitando en ranchos, sin condiciones sanitarias, sin poder explotar su madera, trabajando sus campos en forma primitiva. El camino pavimentado será otro paso a la civilización" (*El Mercurio*, 28/febrero/1999).

Así es como Ralco ha sido emblemático para todos los sectores involucrados, ya que representa las condiciones de un modelo de sociedad, de un sistema socioeconómico y de una perspectiva político-social.

Lo que ha pasado es que todos aquellos que se han deslumbrado por lo que les ofrece el mercado, al pretender convertir todo lo que circula en mercancía, están encandilados por el brillo de las inversiones y la luminosidad del lucro que la energía eléctrica puede generar. No obstante, también deben estar dispuestos a asumir los riesgos que significa tener que modificar su marco axiológico, el que puede entrar en cortocircuitos con los valores de la transnacionalización del capital financiero. (Morales, mayo 2000)

A estas alturas, pocas dudas pueden haber acerca de lo que une las coincidencias de perspectivas, de estilos y cobertura medial, a saber, la compartida postura política de los sujetos e instituciones para las cuales estos trabajan. Son analistas que privilegian el "habitat" del gabinete desde el cual acceden a las referencias de la virtualidad, conectados sin riesgos ni demoras al mundo de la internet, amparados en una visión academicista que postula la neutralidad de la ciencia y la objetividad del conocimiento, cobijados por instituciones privadas financiadas por empresarios y políticos, herederos de la vieja derecha, fundadores del pinochetismo y propulsores del populismo integrista lavinista.

Para los científicos sociales formados en las escuelas de la rigurosidad etnográfica, donde resultan imprescindibles la aplicación de métodos que permitan confrontar, verificar y evaluar lo que está escrito con lo que es el comportamiento concreto de las personas en diversos contextos y períodos, resulta poco habitual considerar el tipo de opiniones vertidas por los sujetos en referencia, como el resultado de sistematizaciones de un proceso de investigación, sea esta realizada con propósitos heurísticos y/o hermenéuticos.

Nos parece que la visión nacionalista integracionista, proviene de los planteamientos de algunos oficiales de la Academia de Guerra, entre los cuales ha sido publicitada la tesis del Mayor de Ejército, Carlos Mezzano, quien concluye que la situación mapuche es un tema de seguridad interna y es un conflicto de alta peligrosidad; y que se debe al atraso histórico del pueblo mapuche, donde actúan extremistas de izquierda usando el indigenismo como recurso. Para el Mayor, el indigenismo afecta la unidad nacional, y el uso de nociones como etnodesarrollo y etnodiversidad, tiene efectos negativos para la fuerza moral, motor y palanca del progreso: que es la unidad nacional (D.A., 11/mayo/1999:B 4-5).

Nos queda aún un cabo suelto: el del empresariado que es dueño de los medios escritos: El Mercurio, La

Segunda, El Diario Austral; y que financia las universidades e institutos privados, para los cuales trabajan la mayoría de estos investigadores. Basta con conocer las opiniones de los empresarios de la Corporación de la Madera, de sus gerentes, de revisar los informativos de la organización empresarial; para comprobar que es la misma perspectiva de fondo.

El Gerente Regional de Forestal Mininco, sr. Andrés Ovalle quien ha manifestado preocupación por "la situación de los trabajadores que están expuestos a los ataques de las comunidades". Afirma que "el ambiente de militarización no lo han creado ni la forestal ni Carabineros, sino quienes han atacado con piedras, palos y boleadoras a nuestro personal" (D.A., 9/marzo/1999). Dos años después, el máximo dirigente de la CORMA, José Ignacio Letamendi, a través de El Mercurio, señala que

"Lo que pasa es que cuando existe un sentido de impunidad, cuando se piensa que una acción violenta tendrá un costo cero para el delincuente, siempre se procede a dar un paso más allá"

"La propiedad privada es privada y cualquier violación requiere el desalojo inmediato"

(Barrías Reyes Rodrigo: "Se acabó la tregua", en El Mercurio, 11 de Marzo de 2001)

Reafirma lo anterior, las opiniones emitidas tanto por los empresarios de la Confederación de la Producción y el Comercio, como por los directivos de la Sociedad de Fomento Fabril y de la Sociedad Nacional de Agricultura.

Desde la Confederación de la Producción y el Comercio, su Presidente el sr. Walter Riesco, afirma que es el gobierno quién debe solucionar el problema indígena sin tantos diálogos y con más hechos. Estima que las situaciones actuales son una acción deliberada de grupos organizados de agitadores. Piensa que se desconoce el legítimo derecho que tienen estas personas a acceder a la propiedad de la tierra en las mismas condiciones y atributos que el resto de los chilenos. Es enfático al afirmar que "no puede aceptarse ni justificarse la existencia de territorios en los cuales el imperio de la ley se hace impracticable" (D.A., 10/marzo/1999).

El sr. Felipe Lamarca, Presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, propone convertir a los mapuche en empresarios agrícolas para salir de la situación de extrema pobreza. Exige "cortar de raíz cualquier intento de propagación de los conflictos, y el gobierno debe respaldar plenamente a los privados, debe reponer el estado de derecho y desarrollar políticas sociales" (D.A., 31/marzo/1999).

Andrés Santa Cruz, quien "comanda" la SNA, señala en un reportaje de El Mercurio que

"Los agricultores siempre han tenido una buena relación con los mapuches. Además, no entiendo esa distinción que se hace respecto del pueblo mapuche. Ellos son chilenos de origen mapuche, tal como existen chilenos de origen alemán, español o italiano. ¡Son todos chilenos, mi amigo, y por eso se tienen que atener a las leyes chilenas! Ahora, si no les gusta, entonces váyanse. Ese es mi consejo. ¡Váyanse!" (Barría: 2001).

Atreviéndose a señalar algunos antecedentes acerca de las inversiones personales del empresario y ex-Presidente Eduardo Frei, el periodista ambientalista Cristian Opazo, evidencia una de las puntas del iceberg empresarial, y aporta con antecedentes que iluminan los intereses de clase, los que habitualmente son recubiertos por el "interés nacional" o "de todos los chilenos" como acostumbraba afirmar en sus escuetos discursos el ex-presidente. (Opazo, 2001).

Así es como hemos hipotetizado que la nueva derecha chilena está consistentemente articulada a través de empresarios que no sólo son dueños de industrias, sino de universidades e institutos, para los cuales trabajan personas que está construyendo un discurso académico en torno al pueblo mapuche.

El poder económico y político que sustentan el empresariado, es coherente en lo ideológico con el poder militar, en la perspectiva de la seguridad nacional planteada por el Estado Mayor de las fuerzas armadas

Estos sectores de poder en la sociedad chilena actual, aunque diversos entre si en muchos aspectos, en relación al pueblo mapuche coinciden en un aspecto diagnóstico: el calificarlos como pobres y conflictivos. Tales sectores se oponen a la posibilidad de una autonomía nacional del pueblo mapuche y para algunos esto es considerado como un atentado a la unidad nacional.

Así, en las concepciones predominantes de las políticas oficiales del estado nacional se verifica que las sociedades indígenas pasan a ser consideradas como problema, donde es el empresariado quien acaba definiendo los contenidos.

La estrategia compartida de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, el gobierno chileno, los grandes empresarios nacionales (y transnacionalizados), algunas organizaciones no gubernamentales y cientistas sociales, para manejar a su favor los conflictos con diversos sectores del pueblo mapuche ha alcanzado un relativo éxito (Johnston y Turner:1998).

Tal estrategia se ha basado en los siguientes aspectos:

- 1.- La lógica sobre la cual se establecen las relaciones, es aquella de evitar las confrontaciones directas, asumiendo que todo puede ser dialogado y que las partes pueden llegar a un acuerdo negociado.
- 2.- La otra parte en el conflicto, nunca debe ser aceptada como un colectivo organizado, y para establecer los eventuales acuerdos, y llegar a los términos de negociación debe ser trabajado caso a caso, familia a familia, persona a persona.
- 3.- Una vez establecida una base de negociación, se trata de convencer seduciendo a la otra parte con propuestas de beneficios materiales, sean estos traducibles en bienes, inversiones, o directamente en dinero.
- 4.- Forma parte de esta estrategia, la tentativa de incorporar a los eventuales opositores en los proyectos, ya sea directamente como consultores, trabajadores, o indirectamente, como funcionarios del gobierno o la empresa, o como miembros de alguna instancia de apoyo.
- 5.- Si las anteriores medidas no dan el resultado esperado, se busca los medios de descalificar y deslegitimar las demandas, ya sea ubicándolas como atentatorias a la legalidad vigente, o bien relacionándolas a propósitos ajenos a los pueblos indígenas

Los dirigentes mapuche plantean mayoritariamente las demandas por Autonomía y Territorio, lo que claramente manifiesta una cuestión política central, la que puede ser evitada o escamoteada por la sociedad política y civil que conforman el Estado chileno, pero que está firmemente instalada en los que orientan el movimiento político mapuche actual.

Así es como las demandas mapuche por autonomía y territorio, son para los sectores del poder económico, político e ideológico en la sociedad chilena, un asunto que pone en jaque las reglas establecidas, y que obliga a pensar profundo acerca de los cimientos desde los cuales se ha construido, a saber: la idea de que un Estado corresponde a una sola Nación, la protección de la propiedad privada, la legitimidad ético-moral y vigencia de la cristianización, y la homogenización de una identidad nacional.

Proyecciones para la futura relación Estado chileno-pueblo mapuche

Si consideramos las características que ha tenido el proceso de construcción de hidroeléctricas en territorio mapuche-pewenche, la imposición del ByPass a Temuco o la Carretera de la Costa, el futuro de las relaciones Estado chileno y pueblo mapuche, va a estar orientado por los propósitos económicos globales, que han predominado por sobre consideraciones sociales y culturales.

Así visto, el futuro cultural de los mapuche, tiene al menos, un par de alternativas:

- a) la búsqueda de espacios en la sociedad chilena neoliberal,
- b) fortalecer los espacios de control directo y propio, manejando los mapuche el cómo y cuando de los nexos con la sociedad chilena.

En un sentido más general, el estado en Chile(y aquí considero vigente la versión gramsciana, ampliada y enriquecida, de la noción marxista de Estado, o sea, sociedad política y civil) , son las Fuerzas Armadas y de Orden, los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, las instituciones religiosas, los partidos, las asociaciones. Como tal, es sujeto de demandas mapuche por autodeterminación, autonomía, autogestión, todas ideas que apuntan al reconocimiento del derecho político.

La actitud que debería tomar el estado chileno, y en particular la "sociedad política" frente a tales demandas es facilitar los mecanismos políticos que arriben a una amplia discusión sobre el tema, proceso en el cual las organizaciones mapuche deberían ocupar un lugar central. Contribuiría mucho el que la sociedad chilena pueda replantearse como un Estado Plurinacional.

Los mapuche necesitan establecer una modalidad de articulación política, según sus propias definiciones, y desde esa posición, proponer las condiciones de relación con los sectores de poder en la sociedad chilena. Lo anterior es posible, siempre y cuando el Estado chileno transforme su postura hacia los pueblos indígenas, es decir, los reconozca políticamente, permita el desarrollo de procesos de autodeterminación sin establecer condiciones previas.

Referencias

- * Anónimo: " Pueblos Indígenas: Mitos y Realidades", en Temas Públicos Nº 422, Libertad y Desarrollo, 3 de marzo de 1999.
- * Barría Reyes, Rodrigo: "Se acabó la tregua", en El Mercurio, 11 de Marzo de 2001
- * Benavente, Andrés y Jaraquemada, Jorge: Informe Político No. 71, Instituto Libertad y Desarrollo. Julio de 2001.
- * Castro, Eduardo V. de y de Andrade, Lúcia M.M: "Hidrelétricas do Xingu: o Estado contra as sociedades indígenas", en As Hidrelétricas do Xingu e os Povos Indígenas, Comissão Pró-Índio de São Paulo, São Paulo, Brasil. 1988.
- * CORMA: Declaración pública. Marzo de 1999
- Mailing Ejecutivo; Publicación bimestral editada por la Corporación Chilena de la Madera, Año 3 Nº 1, Santiago de Chile, Marzo de 1999.
- * Foerster, Rolf y Montecino, Sonia: "¿Conadi o ConNadie"?, en Diario El Mercurio: A2. Domingo 20 de julio de 2001.
- * Goldman, Michael: " El discurso ecologista del Banco Mundial". Conferencia , Instituto de Estudios Indígenas, Universidad de La Frontera. Temuco, Chile. 28 de Abril de 1997.
- * Grass P., Antonio: "Las empresas forestales y los problemas del pueblo mapuche", en CORMA, Nº267, abril 1999:36-37. Santiago, Chile. (Antonio Grass es Ingeniero Civil Industrial).
- * Honorato A., Máximo. En "El Mercurio", 28/febrero/1999. Santiago, Chile.
- * Johnston, Barbara y Turner, Terence. "The Pehuenche, the World Bank Group and ENDESA S.A.: violations of human rights in the Panguel and Ralco projects on the Bío-Bío river, Chile". Report of the Committee for Human Rights, American Anthropological Association. 1998. www.ameranthassn.org/pehuenc
- * Lamarca, Felipe. En "El Diario Austral". Empresa El Mercurio, 31/ marzo/1999. Temuco, Chile.
- * La Tercera, Diario de la Empresa Copeva, Santiago de Chile. 1999.
- * Mezzano, Carlos. En "El Diario Austral". Empresa El Mercurio, 11/ mayo/1999:B 4-5. Temuco, Chile.
- * Morales Urra, Roberto: "Encadilamientos por el mercado y cortocircuitos éticos: Cientistas entre el desarrollo hidroeléctrico y los derechos mapuche-pewenche", mayo 2000
- "Más allá de uniones y diversidades: la construcción de un proyecto mapuche de sociedad", (pp.79-90), en Pueblo Mapuche: Desarrollo y Autogestión, por CIDECO, Casa de la Mujer Mapuche, Sociedad MapucheLonko Kilapan e Instituto de Estudios Indígenas-Universidad de La Frontera. Escaparate Ediciones. Chile. Diciembre 2000

* Opazo, Cristian. "Central Falco: ¿conflicto de intereses?", en *Diario El Metropolitano*. 12 y 13 de enero de 2001.

* Ovalle, Andrés. En "El Diario Austral". Empresa El Mercurio, 9/ marzo/1999. Temuco, Chile.

* Raga C., Fernando: "Problemas étnicos y empresas forestales", en *CORMA*, N°267:34-35. Santiago, Chile. (Fernando Raga es el Vicepresidente de *CORMA*). abril 1999.

* Riesco, Walter. En "El Diario Austral". Empresa El Mercurio, 10/ marzo/1999. Temuco, Chile.

* Vial, Gonzalo: "El tema mapuche", (pp.32-33) en *CORMA*, N°267, abril 1999. Santiago, Chile.

* Villalobos, Sergio: "Pehuenches y Demagogia", en *El Mercurio*, A. 2. Santiago de Chile. Sábado 22 de agosto de 1998.

- "Engaño Público", en *El Mercurio*, . Santiago de Chile. Domingo 28 de Febrero de 2001.

Antropología Interactiva

¿Superación del quiebre teoría-práctica?:

Un desafío para la Enseñanza de la

Antropología

Teresa Durán P.*

I. Introducción

Durante el presente año se cumplen exactamente tres décadas desde que se instalara la disciplina antropológica, en la Universidad Católica de Temuco. Para quienes fuimos formados en la primera escuela, continuar en ella constituye un desafío permanente de revisión y ajustes. Haciendo una síntesis de los hitos problematizadores más significativos identificamos tres, los que exponemos a continuación:

1. ¿Cuán válida puede ser una propuesta local de Antropología Aplicada respecto de la instalación de un modelo de origen (1971-75), centrado en la construcción del conocimiento antropológico, siendo que sus temáticas conciernen mayormente a fenómenos locales? (1992-96).

2. ¿Cuán legítima puede ser una opción teórico – metodológica centrada en los fenómenos socioculturales, respecto de las teorías emergentes que en los últimos años en Chile se han volcado a la opción idealista de los estudios del lenguaje hacia una antropología literaria? 2.

3. ¿Cuán legítima puede ser una teoría local de antropología, en este caso Antropología Interactiva, en tanto posibilidad de reproducir el modelo de origen para construir conocimiento antropológico al mismo tiempo

que plantearse como opción de legitimidad social asociada a esta producción?.

Estos hitos identificados conciernen, por un lado, a la relación del quehacer antropológico que incluye opciones paradigmáticas en el trasfondo de los modelos de origen y sus cambios, y por otro, a la relación del quehacer con la sociedad en la que éste se lleva a cabo. Esto quiere decir que los hitos problematizadores no están sólo demostrando preocupación por cómo logramos un determinado corpus de conocimiento respecto de un problema antropológico específico, sino que los hitos conciernen a estilos de antropología, modelos de enseñanza y formas de vinculación con la sociedad desde una perspectiva teórico – metodológica.

En el III Congreso de Antropología dimos cuenta de los dos primeros problemas, abarcando una interrumpida historia local de dos décadas de enseñanza y quehacer localizado. En esa oportunidad confrontamos estos aspectos por un lado, con el modelo de origen in situ, 3 y por otro, con las teorías emergentes a nivel local (Durán, T, 1998; pp 197).

Posteriormente, en la Primera Jornada de Extensión Académica de la Escuela de Antropología (2000), di a conocer las particularidades teórico – metodológicas de la teoría de la Antropología Interactiva. Un análisis más exhaustivo de la misma presentamos en México

* Durán, Teresa. La autora asume la representación del patrimonio intelectual del Centro de Estudios Socioculturales CES y de la experiencia de la cátedra en Antropología Aplicada de la Escuela de Antropología de la Universidad Católica de Temuco (1996-2001). El CES está conformado por los antropólogos Noelia Carrasco, Marcelo Berhó, Héctor Mora ex alumnos de la Escuela, equipo en el cual participan otros estudiantes y profesionales externos.